

## IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

### JUZGADO DE LO SOCIAL DE

**143****MADRID NÚMERO 31**EDICTO  
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Amalia del Castillo de Comas, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 31 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 24 de 2015 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña Aída González García, don Carlos Sanz Matarranz, doña Carolina Vicent Toril, doña Celia Gutiérrez Tamayo, doña María de las Mercedes González Martín, doña María Estrella Tabárez del Pozo, doña María Isabel de la Gándara Botija, doña María Teresa Segura Sanz, doña Marta Donoso Muñoz Torrero, doña Mercedes Giménez Gómez y doña Mercedes Hernández Chimenno, frente a “Prodrug Multimedia, Sociedad Limitada”, y “Spanish Publishers Associates, Sociedad Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado auto y decreto, cuyas partes dispositivas, respectivamente, son del siguiente tenor literal:

Despachar orden general de ejecución del acta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación a favor de la parte ejecutante doña Mercedes Giménez Gómez, doña María Estrella Tabárez del Pozo y doña María Isabel de la Gándara Botija, frente a la demandada “Prodrug Multimedia, Sociedad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 20.257,15 euros (a doña Mercedes Giménez Gómez 13.433,51 euros, a doña María Estrella Tabárez del Pozo 3.935,62 euros y a doña María Isabel de la Gándara Botija 2.918,02 euros), más 1.115,79 euros de intereses y 2.028,71 euros de costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación, y a favor de doña Celia Gutiérrez Tamayo, doña Aída González García, doña Marta Donoso Muñoz Torrero, doña Mercedes Hernández Chimenno, don Carlos Sanz Matarranz, doña María Teresa Segura Sanz y doña Carolina Vicent Toril, frente a la demandada “Spanish Publishers Associates, Sociedad Limitada”, parte ejecutada, por un principal de 42.905,13 euros (a doña Marta Donoso Muñoz Torrero 12.399,69 euros, a doña Aída González García 5.004,05 euros, a doña Celia Gutiérrez Tamayo 5.206,34 euros, a doña Mercedes Hernández Chimenno 4.474,56 euros, a don Carlos Sanz Matarranz 4.667,75 euros, a doña María Teresa Segura Sanz 7.312,19 euros y a doña Carolina Vicent Toril 3.840,55 euros), más 2.359,78 euros de intereses y 4.290,13 euros de costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Requerir a “Spanish Publishers Associates, Sociedad Limitada”, y “Prodrug Multimedia, Sociedad Limitada”, a fin de que en el plazo de cinco días manifiesten relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que asciende a 42.905,13 euros en concepto de principal para “Spanish Publishers Associates, Sociedad Limitada”, y 6.650,29 euros provisionalmente para intereses y costas, así como 20.287,15 euros en concepto de principal para “Prodrug Multimedia, Sociedad Limitada”, y de 3.144,50 euros en concepto provisional de intereses de demora y costas. Deberán manifestar dicha relación con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberán, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmente les representen, y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales deberán manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmuebles deberán indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrán ser sancionadas, cuando menos, por desobediencia grave en caso de que no presenten la relación de sus bienes, incluyan en ella bienes que no sean suyos, excluyan bienes propios susceptibles de embargo o no desvelen las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérseles también multas coercitivas periódicas.



Proceder a la investigación judicial del patrimonio de las ejecutadas. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos de las deudoras de los que tengan constancia, tras la realización por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con las ejecutadas deban tener constancia de los bienes o derechos de estas o pudieran resultar deudoras de las mismas.

Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Administración Tributaria tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignaciones judiciales”.

Se acuerda el embargo de los saldos de “Spanish Publishers Associates, Sociedad Limitada”, y “Prodrug Multimedia, Sociedad Limitada”, que existan en diferentes entidades a favor de las ejecutadas en cuanto sean suficientes para cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Asimismo, se acuerda el embargo sobre los créditos que pudieran existir a favor de las ejecutadas por relaciones comerciales mantenidas con otras empresas hasta el límite de las cantidades debidas. A tal fin, líbrense los correspondientes oficios a las referidas empresas al objeto de requerirles, bajo su personal responsabilidad, para que en el plazo máximo de cinco días procedan a dar cumplimiento de lo acordado, transfiriendo a la “Cuenta de consignaciones y depósitos” en este Juzgado las cantidades adeudadas.

Hágase saber a las ejecutadas que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución:

a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que las ejecutadas cumplieren en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.

b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.

La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la número 2804/0000/64/0024/15, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco cuenta consignaciones”.

Se advierte a las destinatarias de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Spanish Publishers Associates, Sociedad Limitada”, y “Prodrug Multimedia, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 10 de abril de 2015.—La secretaria judicial (firmado).

(03/12.122/15)

